



Uno de los cañones que flanquean el castillo de Montjuïc. / CARLES RIBAS

# Partidos y ONG se oponen a que Defensa esté en el Centre per la Pau

Los socialistas quieren que Exteriores sea parte del consorcio de Montjuïc

BLANCA CIA  
Barcelona

¿Se organizarían actividades de corte antimilitar? ¿Se cuestionaría la política de compraventa de armas? Las preguntas se las hacen destacadas organizaciones y entidades del movimiento por la paz —muy activas en Barcelona, especialmente desde las movilizaciones contra la guerra de Irak— sobre las cortapisas que, en su opinión, comportará la presencia del Ministerio de Defensa en el futuro consorcio que debe gestionar el Centre per la Pau del castillo de Montjuïc. Así piensan no pocas de esas entidades, como Fundació per la Pau, Justícia i Pau y el Centre Unesco en Catalunya, entre las más destacadas. Igual opinión tienen las formaciones municipales de ICV, CiU y ERC. La presencia de Defensa está marcada en la orden ministerial de mayo de 2007 de cesión del uso del castillo de Montjuïc.

“Es una idea promovida desde arriba [una Administración], sin la participación activa de las entidades”, apunta Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau. El análisis es compartido por otras ONG que se quieren mantener, de momento, al margen del proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona. “Mientras persista el condicionante de que esté Defensa, nosotros no participaremos”, sostiene Miquel Àngel Essomba, director del Centre Unesco de Catalunya. Parecida reflexión hace Pere Ortega, de la entidad católica Justícia i Pau: “Estamos a favor del Centre per la Pau, pero consideramos que la presencia de Defensa puede determinar las actividades que se podrían desarrollar”. “No son cosas antagónicas la presencia de Defensa y que las ONG formen

parte del consejo asesor que tendría el Centre per la Pau”, replica Ignasi Cardelús, delegado de la alcaldía encargado de encarrilar el consorcio y el citado centro. Ese consejo asesor, aclara, no tendría voto. La Federación de ONG de la Paz no quiere azuzar la polémica: “Estamos en conversaciones”.

De las cinco formaciones políticas del Consistorio, el PSC y el PP son los que están de acuerdo con la presencia de Defensa en el Centre per la Pau. Iniciativa per Catalunya, socia de gobierno de los socialistas, está en contra, como también lo están CiU y ERC (véase EL PAÍS del 1 de marzo pasado). “Fue un retorno condicionado a crear un consorcio y un centro. Nosotros podemos estar de acuerdo con el Centre per la Pau, pero no en que la firma y la representación de la Administración central sea la del Ministerio de Defensa”, explica Quim Mestre, edil de ICV. Otra cosa sería que la representación la ostentase, por ejemplo, el Ministerio de Exteriores. De hecho, los socialistas del Consistorio quieren que en el futuro

consorcio también esté el Ministerio de Exteriores. Fuentes municipales apuntan que la exclusión de Defensa es poco menos que imposible, sobre todo teniendo en cuenta que la actual titular de ese ministerio es la socialista catalana Carme Chacón.

Mientras, la alcaldía ha decidido poner en marcha de alguna manera el Centre per la Pau,

## Cursos de resolución de conflictos en el castillo de Montjuïc

aunque formalmente no existe, ya que antes se debe constituir el consorcio entre las tres administraciones. Y para que eso ocurra, los socialistas del Ayuntamiento necesitan una mayoría que hoy por hoy no tienen. Pese a esa situación, Cardelús —considerado el brazo derecho del alcalde, Jordi Hereu— ha nombrado a un técnico, Jordi Capdevila, como responsable

del futuro Centre per la Pau. “Será un centro de formación para la prevención de conflictos y un espacio para trabajar los valores por la paz”, explica Capdevila.

El principal cometido del centro, según Cardelús, será formar a los profesionales que están sobre el terreno en la resolución de los conflictos. “Donde es muy habitual que el ejército y las ONG trabajen codo con codo”, subraya. De momento, han organizado un curso que se realizará esta primavera en el castillo, al que se han apuntado una treintena de técnicos de agencias internacionales, algunas colaboradoras con la ONU. Los cursos —íntegramente en inglés— se los costearán los asistentes y el Consistorio aportará una subvención. “En el futuro, Montjuïc los podrá alojar también porque proyectamos habilitar una zona como residencia”, explica Cardelús.

El otro objetivo del centro, el fomento de los valores por la paz, se realizará con otras actividades, como exposiciones —ya hay una prevista sobre la justicia global— y seminarios.

## ¿Duplicidad de instituciones?

La creación del Centre per la Pau fue una decisión que tomó el Gobierno central cuando anunció la cesión de Montjuïc. Fue en mayo de 2007, en la campaña municipal de Jordi Hereu. Meses más tarde, después de años de preparación, se creó el Centre Català Internacional per la Pau (ICIP), bajo el paraguas del Departamento de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat. “Fue un tra-

bajo promovido por las entidades y cuyo consejo rector ya refleja que la mayoría es del mundo de las ONG”, explica el director del ICIP, Rafael Grasa. En efecto, de los 10 miembros del órgano gestor, tres son de la Administración y nueve de entidades y la Universidad. El objetivo y las finalidades de ambas instituciones pueden solaparse. Es el temor que apuntan desde las entidades. “Para que eso no ocu-

rra, el Centre per la Pau tiene que definir bien su proyecto”, añaden. El ICIP tiene claro el suyo: impulsar actividades, seminarios e iniciativas que llamen a la participación por la paz. Lo harán desde una céntrica oficina que abrirán esta primavera. “En el castillo se pueden organizar exposiciones, pero la visibilidad para que la gente se anime y entre a preguntar no se puede tener en Montjuïc”, añade.

## 150 entidades piden que se apruebe ya la nueva perrera

À. PIÑOL, Barcelona

Los portavoces de 150 entidades que defienden los derechos de los animales pidieron ayer al Ayuntamiento de Barcelona que apruebe de una vez por todas el proyecto de la perrera que se construirá junto al Parc de l'Oreneta y recuerdan las pésimas condiciones en que se encuentra la instalación actual. “El debate se ha politizado excesivamente y el nuevo centro es urgente. Se nos promete el cielo, pero los perros soportan ahora un infierno”, dijo Leonardo Anselmi, de Libera, uno de las entidades que, como Altarriba y Faada, reclaman el acuerdo.

Las entidades piden también que no se cierre la perrera actual y se reforme, porque en la nueva sólo habrá un centenar de jaulas. Imma Mayol, regidora de Iniciativa-Verds, presentó en octubre el proyecto, que suscitó el rechazo de Convergència i Unió (CiU). Esquerra Republicana (ERC) lo apoyó con reservas y en enero, al conocer mejor el proyecto, se desdijo porque se trataba de una zona de conectividad de Collserola y por ser demasiado caro el proyecto (9 millones de euros).

Portabella propuso emplazarla en Can Calopa, otra área protegida de la sierra, descartada por el equipo de gobierno. Aun así, tiene las llaves de la nueva perrera. “Estamos intentando satisfacer las exigencias de ERC”, señalaron fuentes de ICV, que aseguraron que la actual ubicación está fuera de los límites de protección de Collserola. El grupo ecologista Depana cree que es una zona que se debe preservar porque está entre la ciudad y la sierra.

## 600 alegaciones

El proyecto, que requerirá un plan especial, ha recibido 622 alegaciones, principalmente de padres de alumnos del colegio Aula, que está a 20 metros de la futura instalación. Además han presentado recursos el colegio Betania Patmos, el Costa Llobera (“sólo piden garantías de que no haya molestias de ruidos y olores”, matizan en el Ayuntamiento), CiU, el PP —que ayer volvió a reclamar otro emplazamiento— y vecinos de Pedralbes Nord, de Can Caralleu y de Sarrià.

“Nos parece clasista que algunos padres dijeran que era mejor trasladar la perrera a Vallbona. No hay que ceder”, dijo Anselmi, de la asociación Libera, que tildó de “falaz” e “incoherente” el argumento de que el proyecto sea demasiado caro. “El sector mueve 1.000 millones de euros en toda España. Las perreras son el residuo de ese sistema económico. Invito a que se haga una moratoria y no se vendan perros en las tiendas hasta que se vacíen las perreras”, dijo.